

LAS BALAS NO SON EL CAMINO. EL CAÑÓN DEL MICAY (TESTIMONIO)

Hablamos de El Plateado porque ha sido una de las obsesiones recientes de las operaciones militares en el Cauca, y hacerlo supone referirnos al mismo tiempo a una porción del Micay, a una subregión del sur occidente y a la región del Pacífico, en un mundo multipolar en que las nuevas fases de acumulación del capital están basadas en la explotación del subsuelo y el espacio geográfico. Nuestro hoy parece renovado del pasado. Estructuralmente nada cambia, aunque seguimos creyendo en un programa del cambio autocrítico y basado en el poder creativo popular y civilista, hoy ahogado por los ejercicios de la fuerza. El cambio en el que creemos es la palabra, caminamos en ella; y al mismo tiempo era la estrategia para priorizar lo civil sobre lo militar, y transformar lo militar en cuanto a sus estructuras mentales y a sus estrategias separadas del aparato judicial, para asegurar el acuerdo civilista.

Hoy nuestra subregión se encuentra sometida a un reordenamiento definido desde el mundo global, del que a veces somos pocos conscientes, como la mayoría de los pobladores de los municipios de López de Micay, Argelia, El Tambo y Balboa. Esa condición geopolítica nos implica a las organizaciones y comunidades, a cada uno de los pobladores, y también a las propias dinámicas armadas y sus organizaciones irregulares y regulares.

El narcotráfico es un asunto del capital global, del cual somos el eslabón más débil de la cadena, que además de ser tratado desde una perspectiva militarista, debería serlo des-

de la visión de la justicia social y ambiental. Ese síntoma de injusticia sigue ahí, al lado de una minería media que podría estar abriendo el camino al poder multinacional extractivista.

En ese escenario histórico y estructural se ha asentado el conflicto armado interno y otras violencias armadas. Las organizaciones sociales, cada una con su visión, hemos construido planes y proyectos que alientan esperanza, opacada por la vanidad, los egos que nacen de diferencias y de dolores encarnados sin resolver. Y en ese escenario volvemos al pasado.

La mentalidad militar del enemigo interno y sus imbricaciones en violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, su estrategia paramilitar encubierta, y la corrupción por su involucramiento en los cobros de peaje de las economías ilícitas, o en los niveles más altos de las operaciones transnacionales, dadas las ventajas de ser parte de la institucionalidad y de su relación con sectores empresariales y políticos, están ahí en la piel de la fuerza con que aseguran ese modelo injusto. No son todos, pero tampoco se trata de manzanas podridas. Esa era nuestra aspiración en un gobierno del cambio. Los militares que comprendieron lo que son nuestras organizaciones y el asunto de fondo de la subregión, fueron “dados de baja” por el establecimiento y su visión limitada, que se mantiene en el tiempo. El cambio sigue pendiente.

El modelo militar de hace más de veinte años sigue con estrategias encubiertas, que se expresan en las mismas estrategias paramilitares del pasado, y en Micay con la infil-

tracción, el estímulo a las tensiones armadas entre grupos armados que se dicen revolucionarios, y con la criminalidad armada vigente. Y como dice el escritor, a nosotros, “al pueblo siempre le toca”. Nuestras diferencias atizadas en esa mentalidad de enemigos internos nos alejan en sentimientos que nos impiden pensar y fortalecer una convergencia de la subregión a la región. Seguimos cayendo en la trampa mientras la fuerza con esa economía sigue avasallando el alma de nuestras comunidades.

Infortunadamente, el exMinistro de Defensa pasado, que estuvo distante de la realidad territorial recibiendo las versiones militares, y nuestro Presidente, fueron cayendo con sus altos funcionarios en esas estrategias de tiempo atrás. Fueron atrapados. El cambio sigue pendiente.

Desde la época de las guerrillas liberales, del Quintín Lame, del M-19, del viejo EPL, nuestra subregión real ha vivido de frentes en guerra inconclusas en que lo estructural, la desigualdad social permanente, encuentra en la violencia un problema dentro del cual la búsqueda de nuestros derechos tiene que ser proclamada a gritos y aullidos, aunque sigan sin escucharnos. Nuestras movilizaciones quedan opacadas en las violencias y en una asociación simple, el guerrero oficial impone la versión que acá todos somos instrumentalizados, bajo el argumento que desconoce nuestro ser rural y su creatividad. Ellos pasan después de unos años, y nosotros seguimos acá. Nunca ha sido el Estado el que reconoce nuestras condiciones, y como consecuencia nunca lo van a hacer las salidas de la militarización.

Participamos y creímos en un ordenamiento territorial en torno al agua en camino a la justicia ambiental y social, y creemos en La Paz dialogada con nosotros y los armados más allá de una entrega de armas, y que el camino dialogado implica cambios de mentalidad de la fuerza pública, del modelo extractivista y de las políticas antinarcóticos.

Nuestro gobierno del cambio se sumó a olvidos o a las narrativas oficiales de sectores militares que han pervivido con la Doctrina de la Seguridad Nacional. Decisión que ha desatado un nuevo desarrollo de la violencia del Estado que oculta su servicio al poder corporativo.

Recordamos que en el año 2019 Diego Villagas, comandante de la Fuerza de Tarea Volcánico, expresó sobre nuestra hermosa región: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos, nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”. Eso continúa, así haya algunas diferencias.

Desde los años 80 al año 2016, un sector militar sigue en las mismas, aliándose, infiltrándose, estimulando las disputas entre los irregulares y los fragmentos de los sectores populares. Acá a más de uno los matan por godos o liberales, nos matan con esas divisiones estimuladas.

En abril de 2022, meses antes del gobierno del cambio, se conoció que el coronel (r) del Ejército Robinson González del Río alias “Coro” o “Comando”, fue capturado siendo parte de una estructura criminal al servicio del narco paramilitar Matamba. En medio de las pretensiones de libertad de este famoso Coronel que estaba intentando usar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para lograr sus beneficios de libertad, se conoció que la Fiscalía General de la Nación identificó una estructura paramilitar Cordillera Sur o Cordillera II que sería parte de las AGC o llamado “Clan del Golfo” en la que participaría el Teniente Coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares, alias “Comando o Júpiter”. Son de ingrata recordación las filtraciones sobre el papel del General (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, con el alias “El Padrino”. Estas estructuras estarían operando con estrategias de encubrimiento en El Micay.

El país recordará en ese hilo conductor a Juan Larinson Castro, alias “Matamba” o “el

viejo”, quien se fugó o fue sacado forzada-mente de uno de los patios de alta seguridad de la Cárcel La Picota de Bogotá. Era el jefe de Cordillera Sur. Ellos sin planes estratégicos desarrollaron operaciones para el control territorial del Pacífico nariñense y caucano, implicando, como lo percibieron algunos pobladores, posibles alianzas con grupos irregulares guerrilleros, que consideraron lograr ventajas militares sobre otros. Toda alianza vale en planes de retaguardia.

Estas operaciones encubiertas de sectores de las Fuerzas Militares vienen de años atrás con los Rastrojos, que desaparecieron y asesinaron decenas de pobladores, como lo denunciaron las sobrevivientes organizaciones de víctimas.

Creemos que desde el 7 de agosto de 2022, cuando asumió el gobierno de cambio, las cosas son distintas, pues desconoce los arraigos territoriales de esas prácticas de terror de Estado y sus nuevas fases, al contrario de los planes de operaciones militares desde el gobierno de Uribe, cuya responsabilidad de Estado se encuentra en la impunidad.

Ha sido evidente la infiltración en las fuerzas guerrilleras, antes del acuerdo de paz con las extintas FARC en 2016, y el desarrollo de sus planes de controles estratégicos estimulando disputas territoriales armadas desde el año 2017 hasta hoy, entre el EMC, las FARC, el ELN y la Segunda Marquetalia.

Los planes militares de “Seguridad Democrática y Estado Comunitario: Desarrollo para Todos 2006-2010”, del año 2007; la Ley 1450 de 2011, “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos”, bajo el nombre de “Plan Nacional de Consolidación” y “Política para la Estabilización”, 2018-2022”, y el Plan de Colombia Potencia de la Vida Seguridad Humana 2022-2026, parten de un falso supuesto: una fuerza pública actuante conforme al respeto a los derechos humanos y el Derecho Humanitario. Desconocen de fondo un proceso institucional militar que parte de intereses extractivistas, de la impunidad que les

sustenta y de la desconfianza que existe sobre ellos; así como la comisión por omisión o como acción deliberada de sectores de las Fuerzas Militares sobre un ordenamiento territorial para la economía del tráfico de drogas y el extractivismo, en relación con sectores políticos y empresariales, sin el pueblo.

Obvian las decisiones de nuestro gobierno, los impactos nocivos de hace más de veinte años de las confrontaciones entre las extintas FARC y ELN; las EMC de hoy y el ELN; las del EMC de hoy y el ELN; las del EMC y la Segunda Marquetalia.

Un escenario en que los sectores populares estamos absolutamente fragmentados, pagando un alto costo en nuestros liderazgos sociales y los proyectos organizativos, por lecturas erradas o consensuadas de un gobierno a otro, sobre lo que es esta región de luchas sociales.

La mayoría de los pobladores que apoyamos el gobierno del Cambio se fueron identificando con el proceso propuesto por la Consejería para la Paz, como estrategia de Misión Paz y Plan de Transformación Territorial con las bases sociales, organizaciones de víctimas; mientras simultáneamente abría el diálogo con grupos armados que operan en la región. La estrategia partía de reconocer esas memorias populares de construcción de acuerdos humanitarios y de proyecciones de construcción de una paz con diálogos. Procesos absolutamente peligrosos para sectores que viven de la costumbre, de lo mismo de siempre.

La estrategia era entonces lograr una convergencia en medio de las diferencias y las tensiones sociales para concertar una subregión de paz, una priorización en diálogo entre altas direcciones de las entidades y los liderazgos de las organizaciones sociales de mujeres, campesinas, de cultivadores y de las comunidades negras e indígenas, en la perspectiva de desarrollo de planes de atención ante carencias socioeconómicas con acciones inmediatas, unas de mediano y unas de planes a veinte años.

Ese proceso de diálogo bilaterales y de construcción de planes de convergencia eran un aliciente. Era un nuevo método que se sabía novedoso ante los permanente ensayos fracasados de estrategia militares o del proceso de paz de 2016, que nunca cumplió sus compromisos con las comunidades en materia de sustitución y obras básicas de infraestructura. Era una salida desde abajo, con conocimiento territorial de sus sensibilidades e intereses. Esos encuentros de los años 2022 y 2023 con las organizaciones sociales en Popayán, liderado por la Consejería de Paz y Dirección de Planeación Nacional, demostró un compromiso serio con las comunidades y un abordaje de distensión con un acuerdo humanitario civil para recobrar la confianza a los líderes y a las comunidades que por décadas padecen los incumplimientos y las tensiones propias con sectores militares y policiales responsables de una operación contra la población. Mientras se avanzaba de abajo arriba por decisión presidencial, la coordinación pasó al director del PNIS, que agotó varias convocatorias sin presencia ni compromiso de las entidades. Ese proceso a pesar de un breve diálogo de las organizaciones sociales con el Señor Presidente en instalaciones de las Fuerzas Militares, no fueron escuchadas. Se anunció que las Fuerzas Militares no solamente reconquistarían el Micay, sino que sería el actor que convertiría la siembra de coca en zona de café y de cacao de exportación, productos que no son siempre viables para todos los pisos térmicos del Micay. Meses después en otro salto extraño se anunció por el propio Presidente la creación de una gran represa.

Las organizaciones sociales reconocieron desde ese momento que iban a recorrer los mismos caminos de años anteriores, de represión con estigmatización y señalamientos, judicializaciones y seguramente en el plazo medio con eventuales asesinatos de algunos liderazgos. Todo esto con un agravante: la desconfianza y la fragmentación entre las organizaciones que siguen ahí sin dimensionar esa estrategia económica de la represión militar policial paramilitar, las guerras proxy; una

guerra que con las cicatrices y heridas abiertas del pasado entre nuestras organizaciones que sigue con las guerras y con la paz para el mercado neoliberal.

Un año después del giro a la paz del Presidente, y en coincidencia con una visita del Comando Sur de los Estados Unidos al Cauca, se anunció el Plan Cauca. Todo se olvidó, todo se borró, y así una nueva escalada de violencia se ha venido hasta ahora desatando, en un silencio sepulcral de nuestras organizaciones que esperamos aún que el gobierno cambie, que se dimensione la que significa para esta subregión, y el país, las operaciones militares de La Gorgona.

La vida en la subregión sigue igual y los pobladores se o nos preparamos para lo peor. Algunos de ellos dicen: “Volvimos a la época de consolidación de Uribe, dando vueltas sobre lo mismo”.

Siguen en nuestras memorias los abusos policiales contra los pobladores en El Plateado en esa visión contrainsurgente. Una policía actuando sin autoridad y dada su deslegitimación uno y otro grupo armado con raíces guerrilleras siguen ahí, legitimándose.

“Arrancamos bien, íbamos encontrándonos poco a poco en medio de nuestras diferencias, sanando heridas, y hoy estamos más divididos. Si no cesan nuestras divisiones, el Cauca, Colombia, será un nuevo escenario donde las armas definan, ante esa ofensiva militar y económica del Estado”

El Micay, como otras partes de la “Región pacífico”, parecen andar entre otros planes, megaproyectos como el Plan Puebla Puerto Asís, el Proyecto Arquímedes, la Iniciativa para la Integración de Sur América, y el Proyecto estratégico de la vía al mar que conectará El Plateado (Argelia) Belén Brazo Seco Guapi; como también el proyecto de la acuapista del Pacífico, la doble calzada entre Cali (Valle) y Pasto (Nariño), la Consolidación de la variante Timbío-El Estanquillo, y el fortalecimiento de un puerto en la Costa Pacífica Caucana;

y proyectos energéticos como Arrieros del Micay al occidente, Patía I y Patía II al sur, la interconexión eléctrica Popayán Guapi, y el avance en el gasoducto Cali-Popayán.

Y si miramos con inquietud de lo que sucede en Nariño con la disidencia del ELN y las de las nuevas Farc que anuncian sustituciones y desmovilizaciones, se trata de la desmovilización minera sin el pueblo, que propicia que empresas multinacionales entren con sus inversiones, como no lo lograron en el año 2016 con La Paz de Santos. Es posible que esto pueda suceder por acá, con empeños de paz que siguen sin abordar lo estructural en medio de la sintonía de los gobernadores de Cauca y Nariño. “Da dolor mirar con desconfianza nuestro gobierno del Cambio, pero parece que los giros son para el modelo extractivista”. “Ya se empieza a hablar de paz territorial para ese mercado del oro, mientras nosotros seguimos divididos y como observadores, peones de esa paz y esa guerra militar y guerras armadas”.

El Plan de Transformación Social se volvió una estrategia cívico militar que le da preponderancia a la ofensiva de las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, lideradas ahora por un exoficial de la Armada Nacional. El contenido social se ha limitado a algunas acciones puntuales, presencia mediática de los funcionarios y gran desconfianza de la población no solo del Plateado.

La Fuerza Pública reclama avances que son rápidamente desmentidos con acciones de los grupos irregulares, mientras algunos sec-

tores de nuestra población, en manifestaciones dejamos en cuestionamiento la actuación de los garantes del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

En conclusión

Uno de los renglones de la economía arraigada en la subregión que es la producción de hoja de coca, la transformación en pasta de coca y su comercialización por el corredor Pacífico, sigue vivo. La publicitación de exportación y sustitución de las Fuerzas Militares de la coca es propaganda. En la región se han otorgados títulos mineros y existen solicitudes en trámite sobre exploración y explotación de recursos minero-energéticos sin licencias ambientales. Y sigue todo andando. En medio de esa guerra opaca de la Fuerza pública que sagazmente atiza las disputas.

Así vemos nuestras historias y la posibilidad de transformarlas, si maduramente nuestras organizaciones nos juntamos en lo fundamental, reconociendo nuestras diferencias, que no son contradicciones, y retomamos una metodología de encuentros que iban dando resultados para resolver los asuntos estructurales que han dado origen al conflicto armado y otras violencias.

El Micay no cambia con balas ni con los militares o policías por delante. Es con la potencia de lo civil y su palabra, con la palabra de las comunidades y organizaciones todas. El gobierno empezó bien y abortó el camino.